PRODUCE INFORME.-

Señor Juez:

Martín L. Bataller (domicilio electrónico 20322679646), abogado, en representación del Estado Nacional, con el patrocinio letrado de Marcos A. Giangrasso, constituyendo domicilio procesal en Sarmiento 329, piso 10° –Zona 140- (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos), en los autos caratulados “*HIGHTON DE NOLASCO, ELENA INÉS c/ EN s/ AMPARO LEY 16.986*” (Exp. CAF 83.656/2016), a V.S. me presento y digo:

-I-

PERSONERÍA

Como lo acredito con la copia debidamente firmada de la Disposición SsC N° 225/15 que acompaño, sobre cuya vigencia y autenticidad presto juramento de ley, he sido designado para representar al Estado Nacional en juicio y, en tal carácter, tengo amplias facultades para intervenir en estas actuaciones.

- II -

OBJETO

En legal tiempo y forma -mi representado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, fue notificado el día 30 de diciembre de 2016- vengo a producir el informe requerido por V.S., relacionado con las circunstancias de hecho y de derecho que se invocan en el escrito de inicio.

- III -

LA PRETENSIÓN DE LA AMPARISTA

La Sra. Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctora Elena Inés Highton de Nolasco, promovió la presente acción de amparo en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional y concordantes de la Ley 16.986 contra el Estado Nacional, a fin de que V.S. declare “...la nulidad en los términos de la ley 24.309, de la reforma introducida por el art. 99, inc. 4°, párrafo tercero, del nuevo texto de la Constitución Nacional al art. 86, inc. 5°, del texto de 1853/60, que importa una restricción no habilitada a la garantía de la inamovilidad que consagra el art. 110 del actual texto constitucional (anterior art. 96) en cuanto establece que un nuevo nombramiento, precedido de acuerdo del Senado, será necesario para mantener en el cargo a cualquier juez, una vez que cumpla la edad de setenta y cinco años.”

En sustento de la pretensión articulada, la accionante sostiene que la reforma citada *“adolece del vicio de nulidad absoluta, en virtud de haberse configurado un manifiesto exceso en las facultades que disponía la Convención reformadora en virtud de lo dispuesto por la ley 24.309, conteste el procedimiento reglado por el art. 30 de la Constitución Nacional y lo dispuesto en la declaración de necesidad instrumentada mediante la citada Ley.”*

En concreto, la herramienta procesal elegida por la accionante tiene por objeto -ante la denuncia de nulidad articulada- requerir la intervención del Poder Judicial en resguardo del derecho que considera conculcado, representado por el instituto de la inamovilidad en el cargo de los jueces, y en el caso particular de quien acciona, como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

- IV -

ANTECEDENTES

La doctora Highton de Nolasco fue designada Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 752 de fecha 17/6/2004 (B.O. 18/6/2004).

El nombramiento, precedido por el correspondiente acuerdo senatorial, fue efectuado por el Poder Ejecutivo Nacional en el marco de las disposiciones del artículo 99 inciso 4), del texto de la Constitución Nacional reformado en 1994, por el cual la doctora Highton de Nolasco prestó –sin reparos ni reservas- el juramento al que se hallan obligados los magistrados nacionales. Al respecto cabe recordar que, conforme lo previsto en el artículo 7° del Decreto-Ley N° 1285/58 los jueces deben prestar el juramento de ajustar su desempeño a las previsiones de la Constitución Nacional.

A tenor del artículo 99, inc. 4, párrafo tercero de la Constitución, tales designaciones tienen vigencia hasta que los magistrados alcancen la edad de 75 años. Pero ese límite en modo alguno impide que los jueces de la Nación permanezcan en funciones luego de llegar a esa edad, ya que la Carta Magna prevé la posibilidad de que se efectúen a su respecto nuevos nombramientos ulteriores en los mismos cargos, por lapsos de 5 años, los que podrán ser repetidos indefinidamente.

Destaco que no se ha recibido en el ámbito del Poder Administrador solicitud alguna de la doctora Highton de Nolasco, destinada a poner en marcha el procedimiento previsto por la norma constitucional antes referida, complementada por las disposiciones reglamentarias plasmadas en el Decreto N° 222 del 19 de junio de 2003 (B.O. 20/6/2003). Tal posibilidad se encuentra expedita.

LA VIA PROCESAL

No escapa al elevado conocimiento de V.S., que el progreso de esta vía procesal de excepción requiere que los actos de la autoridad pública que sean impugnados se encuentren viciados de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta.

Tales vicios deben surgir con evidencia y nitidez en el curso de un debate breve, y a la vez la viabilidad del amparo requiere que no existan otros mecanismos procesales - administrativos o judiciales- que permitan obtener la protección constitucional requerida (artículos 1º y 2º, incisos a) y d) de la Ley 16.986).

La jurisprudencia de ese fuero tiene dicho que los recaudos esenciales para la admisibilidad de ese cauce procesal son:

“a) certidumbre del derecho invocado y al cual se busca proteger; b) actualidad de la conducta lesiva; c) carácter manifiesto de la ilegalidad o arbitrariedad de esa conducta y d) origen constitucional o legal de los derechos afectados, y es así que la conjunción de todos ellos, deciden en definitiva, la admisión de esa vía, que valga recordar, no ha perdido con su actual recepción en el Art. 43 de la Constitución Nacional, su carácter de remedio excepcional, sólo reservado para la protección de derechos fundamentales, y en tanto no existan otras vías judiciales idóneas para el resguardo de esos derechos.

Así, pues la arbitrariedad o ilegalidad del acto reputado lesivo debe evidenciarse de materia notoria, requiriéndose que se encuentre desprovisto de todo sustento normativo que le permita tener efectos válidos; es decir, que la arbitrariedad o ilegalidad se presenten en forma ostensible, inequívoca, indudable.” (Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 3, Causa 36335/13, “*Matacotta Roberto Mario c/ EN – M° Justicia DDHH s/ Amparo Ley 16.986*”. Sentencia del 19 de mayo de 2014).

Por su parte, el Alto Tribunal ha resuelto que:

“Corresponde rechazar el amparo si la actora no demostró que su pretensión ... no pueda hallar tutela adecuada en los procedimientos ordinarios ni que se encuentre impedida de obtener, mediante ellos, la reparación de los perjuicios que eventualmente podrían causarle las disposiciones impugnadas.” (CSJN en autos: “*San Luis, Provincia de c/Consejo Vial Federal s/amparo. 27/03/2007 T. 330, P. 1279*).

Resulta pertinente poner de resalto los requisitos establecidos por la norma legal que rige el proceso de amparo en el orden nacional, para la procedencia de esta vía.

El artículo 1º de la Ley 16.986 alude, concretamente, a un tipo particular de acción u omisión de la autoridad pública: “*...aquella que en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta...*”, los derechos o garantías reconocidos constitucional o legalmente, con excepción de la libertad individual.

Cabe destacar que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos de América señala que el “daño presente” (a los fines de la configuración del “caso o controversia”), puede quedar

configurado con la simple amenaza de una sanción o de un acto susceptible de provocar perjuicios (428 U.S. 52 (1979)).

Asimismo, es dable recordar que aquel Tribunal ha señalado –también– que la amenaza hipotética no es suficiente y que el reclamo anticipado o prematuro fundado en que el interés personal de los demandantes se vea afectado por una decisión administrativa, si cierta conducta es eventualmente ejecutada, no alcanza para configurar un caso o controversia (330 U.S. 75 (1947); U.S. 222 (1954), entre muchos otros).

Por otra parte, el daño que necesariamente debe estar presente para habilitar esta vía procesal de excepción, debe encontrarse asociado por una relación de causa-efecto a un acto u omisión ilegítimos, o manifiestamente arbitrarios.

En síntesis, cabe remitirse una vez más a la jurisprudencia de nuestro máximo Tribunal de Justicia, que considera que el amparo:

"Es un proceso excepcional, sólo utilizable en las delicadas y extremas situaciones que por la carencia de otras vías legales aptas pelagra la salvaguarda de derechos fundamentales, requiriendo para su apertura circunstancias de muy definida excepción, tipificada por la presencia de arbitrariedad, irrazonabilidad e ilegalidad manifiesta que configuran, ante la ineficacia de los procesos ordinarios, la existencia de un daño concreto y grave, sólo eventualmente reparable por esa acción urgente y expeditiva" (Fallos: 268:104; 205:35; 300:1231; 301:642; 301:1061, entre otros).

En otro plano, pero a la vez convergente con lo anteriormente expuesto, la tutela judicial inmediata a través de la acción de amparo está reservada por los casos en los que se manifiesta una situación de urgencia objetiva, asociada a la idea de daño cierto, concreto, grave, irreparable que en forma actual o inminente pudiera afectar los derechos enumerados en el artículo 43 de la Constitución Nacional.

En el ámbito doctrinario, Sagüés destaca que *"...el perjuicio que atiende la ley 16.986 debe ser real, efectivo, tangible, concreto e ineludible. Se excluyen, pues, del amparo, los perjuicios imaginarios o aquellos que escapan a una captación objetiva. El daño que se pretende reparar será, por tanto, cierto."* (Sagüés, Néstor Pedro, "Acción de Amparo", Tomo 3, pág.106 - Ed. Astrea, 1988).

La ausencia de una lesión concreta, actual o inminente, tornaría improcedente la vía procesal del amparo. De lo contrario, reitero, se habilitaría el amparo como mero cauce "consultivo", función que es ajena a la competencia asignada a los tribunales (conf. art. 116 de la Constitución Nacional).

Tales son, pues, los extremos cuya concurrencia el Poder Judicial debe corroborar a la hora de pronunciarse sobre la admisibilidad de la vía del amparo.

-VI-

CONSIDERACIONES DE ORDEN JURÍDICO SOBRE EL ARTÍCULO 99,
INC. 4º, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCION NACIONAL

El tema central a dirimir en autos es si resulta pertinente la aplicación al caso, o no, de la doctrina en la que se basa el fallo de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “FAYT, CARLOS SANTIAGO c/ESTADO NACIONAL s/PROCESO DE CONOCIMIENTO” (FALLOS: 322:1616), que declaró la nulidad de la reforma introducida por la Convención reformadora de 1994 en el art. 99, inc. 4º, párrafo tercero -y en la disposición transitoria undécima-, por considerar que dicha reforma afecta la garantía de inamovilidad de los magistrados consagrada en el artículo 110 de la Constitución Nacional.

No se me oculta que parte de la doctrina considera que la sanción de nulidad produce efectos erga omnes. Sin embargo, nuestro Alto Tribunal tiene dicho –desde antiguo- que sus sentencias sólo deciden en el caso concreto sometido a su fallo, que no obligan legalmente sino en él y que en eso consiste, particularmente, la diferencia entre la función legislativa y la judicial (Fallos: 25:368).

La normativa constitucional en juego es susceptible de enfoques diversos –que a la vez parten de una interpretación disímil respecto de los alcances de la Ley N° 24.309 declarativa de la necesidad de la reforma-, que quedaron expuestos en el ya aludido precedente “FAYT”.

1.- Una primera tesitura sería la que quedó plasmada en el dictamen del entonces Procurador General de la Nación, emitido en el ya referido caso “FAYT”.

Desde esa postura, la garantía de inamovilidad de los Jueces de la Nación (consagrada por el art. 110 de nuestra Ley Fundamental, que fue precedido por el art. 96 del texto histórico), no se encuentra afectada por la reforma constitucional de 1994, en tanto la limitación del carácter vitalicio del cargo –una vez que los magistrados alcancen la edad de 75 años- no importaría una restricción de aquella garantía.

Al respecto, el Procurador General de la Nación expresó que:

“... ha reconocido desde antiguo el Tribunal que las normas de la Constitución Nacional, como las de toda ley, deben ser interpretadas en forma coherente, de manera que armonicen entre ellas ... (Fallos: 183:343; 186:170; 199:483 y 234:482, entre otros). Tanto más cuando V.E. ha dicho innumerables veces que la declaración de inconstitucionalidad de una ley constituye la última ratio del orden jurídico, a la que sólo cabe acudir cuando no existe otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la Constitución ... (conf. doctrina de Fallos: 311:395; 312:122, 435, 1437, 1681 y 2315, entre muchos otros). Ello indica que habrá que extremar aún más los recaudos para evaluar la pretensión del actor, consistente, nada menos, que en obtener la declaración de nulidad de una cláusula de la ley Suprema que rige nuestro ordenamiento jurídico”.

Más específicamente, y en relación con los temas respecto de los cuales la Convención reformadora de 1994 se hallaba habilitada para introducir enmiendas al texto histórico de nuestra Constitución, el Procurador General de la Nación señaló en su dictamen:

“... la ley 24.309 no solamente habilita ciertos temas para ser discutidos por la Convención, cuales son los enumerados en los arts. 2º y 3º, sino que, también, prohíbe expresamente cualquier modificación al Capítulo Único de la Primera Parte de la Constitución Nacional (art. 7º).

Así, existen dos grupos de temas bien diferenciados, por un lado, los expresamente autorizados a modificar y, por el otro, los expresamente prohibidos. A su vez, existe un tercer grupo de temas sobre los que la ley nada dice, o sea aquellos no incluidos en los arts. 2º y 3º y que tampoco se encuentran vedados por el art. 7º, entre los cuales está el anterior art. 96 de la Constitución Nacional (actual 110) que invoca el actor. Es cierto, y me adelanto a indicarlo, que el art. 4º de la ley 24.309 especificó que la Convención Constituyente tendría como único objeto considerar las reformas incluidas en los arts. 2º y 3º de la norma, de donde podría concluirse que todos aquellos temas que no estuvieran ahí expresamente mencionados, no podían ser objeto de modificación o reforma alguna. Más si ello es así ¿qué sentido tiene la prohibición expresa del art. 7º? No parece razonable sostener que se trate de una previsión redundante porque, como bien ha dicho reiteradamente V.E., no puede suponerse la inconsecuencia o falta de previsión del legislador, y el intérprete debe evitar asignar a la ley un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando como verdadero el criterio que las concilie y suponga la integral armonización de sus preceptos (conf. Fallos: 317:777 y sus citas), máxime cuando, como sucede en el caso, se trata de un acto trascendente como la declaración de necesidad de reforma de la Carta Magna.

Desde mi punto de vista, la regla que mejor concilie, por una parte, la voluntad del Congreso, al establecer las materias habilitadas y las expresamente prohibidas y, por la otra, las facultades de la Convención Constituyente, sería entonces, la que sigue: la Convención no puede, bajo ningún aspecto, modificar el Capítulo Único de la Primera Parte de la Constitución Nacional (art. 7º de la ley 24.309), tampoco puede modificar los artículos que no fueron expresamente incluidos entre los temas habilitados por los arts. 2º y 3º, pero las modificaciones introducidas en los temas habilitados pueden afectar a los temas que no fueron expresamente incluidos -cuya modificación no se excluye expresamente- siempre que sean razonables y no se aparten de ellos o los modifiquen en forma ostensible. Esta interpretación se ve reforzada, en mi criterio, por la propia ley 24.309, cuando autoriza a la convención a incorporar las cláusulas transitorias que fueren necesarias (arts. 2º, inc. d y 3º, inc. d) y, con relación al caso bajo análisis, cuando la habilita a ‘actualizar las atribuciones del Congreso y del Poder Ejecutivo Nacional previstas en los arts. 67 y 86, respectivamente de la Constitución Nacional’ (art. 3º, letra ‘E’). Una postura contraria, que limite las facultades de la convención exclusivamente a modificar o no aquellos aspectos expresamente autorizados, además de encorsetar indebidamente la actuación del Constituyente -representación máxima del pueblo

soberano-, no se condice con las disposiciones ni con la recta interpretación de la ley 24.309. ... es propio reconocerle ciertas facultades implícitas para el mejor cumplimiento de los fines para la que fue convocada. De otra forma, se vería en la imposibilidad de adoptar cualquier decisión que surja razonablemente implícita del temario de cuestiones habilitadas para su tratamiento, conclusión que se presenta totalmente disvaliosa, por impedir el pleno funcionamiento del Poder Constituyente ... Es que, si bien puede admitirse que el Poder Constituido ponga límites al Constituyente reformador, no puede pensarse que el papel de la Convención se reduzca a homologar las reformas declaradas por el Congreso, pues ello significaría que el ejercicio del Poder Constituyente se trasladó al Poder Constituido, situación totalmente inaceptable y contraria a nuestra propia Constitución.”.

Y en lo referido a la garantía de inamovilidad de los magistrados, el entonces Procurador General de la Nación afirmó que:

“... Tampoco podría predicarse el carácter pétreo de la inamovilidad de los magistrados como forma de evitar una supuesta afectación de la forma republicana de gobierno porque -además de ser aquélla una categoría controvertida, tal como se vio- admite distintas variantes y posibilidades de organización, que son definidas por el pueblo, en ejercicio del poder constituyente, mediante una convención convocada especialmente al efecto. Vale decir, que la inamovilidad de los jueces está destinada a evitar que los otros Poderes constituidos avancen sobre el judicial y, por lo tanto, ellos jamás podrán ignorarla, pero nada impide que sea el propio poder constituyente el que decida modificar sus alcances (...). Por otra parte, creo preciso resaltar que la cláusula cuestionada no importa una nueva causal de remoción, pese a que se aplique a los jueces en ejercicio. Tal asimilación parte del error de no diferenciar entre la acción de remover ... y las causales de cese en el cargo ...”.

En sentido concordante se ha considerado que *“... la Constitución ha incorporado una regla que reconoce múltiples antecedentes en el derecho comparado. El carácter vitalicio de las magistraturas judiciales hace aconsejable limitar los alcances del nombramiento hasta una edad prudente (art. 99, inc. 4, tercer párrafo). La norma constitucional establece la caducidad de los nombramientos cuando el magistrado cumple la edad de 75 años, que es la más corriente en la experiencia comparada (algunos regímenes llevan la obligación de retiro a edades más tempranas, hasta la de 65 años). Procura evitar las dolorosas situaciones que pueden darse cuando sólo existen procedimientos de remoción de índole sancionatoria, como el enjuiciamiento por mal desempeño, y el paso del tiempo, a propósito de un cargo no periódico, trae como consecuencia la disminución de aptitudes. La solución elegida no es rígida, y no obliga en consecuencia a prescindir de magistrados que se encuentran en su mejor forma, caso éste cada vez más frecuente como consecuencia del progreso de la ciencia ...”* (Paixao, Enrique, "La remoción de Magistrados Federales", pág. 437 y sigtes., Rubinzal-Culzoni editores, 1994).

Cabe acotar, finalmente, que la interpretación precedente guarda a su vez correspondencia con las previsiones de distintas normas del derecho constitucional comparado,

en las que se han contemplado lapsos limitados para la vigencia de las designaciones de los magistrados.

Tal el caso de las Constituciones de las Repúblicas de Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y Paraguay, entre otros casos.

Como corolario de los señalamientos que anteceden, resta destacar que la postura precedentemente expuesta ha sido sostenida por los representantes judiciales de este Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en causas anteriormente iniciadas por otros magistrados del Poder Judicial de la Nación, con un objeto similar al de la presente.

Esa fue la posición asumida en los casos “CHIRINOS, BERNABÉ LINO C/ EN- LEY 24309 (ART 99 CN) S/PROCESO DE CONOCIMIENTO” (Expte. N° 13774/10; CSJ 000124/2014 50-C), “SCHIFFRIN LEOPOLDO HECTOR C/ PODER EJECUTIVO NACIONAL S/ ACCION MERAMENTE DECLARATIVA” (Expte. N° 42101123/11) y “AMABILE CIBILS, GRACIELA C/ ESTADO NACIONAL S/PROCESO DE CONOCIMIENTO” (Expte. N° 11443/12); todos ellos se encuentran actualmente a conocimiento y decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Igualmente, esa fue la línea argumental sostenida en causas que se hallan radicadas, a la fecha, en instancias inferiores; vgr. “WILDE, ZULEMA DELIA c/ ESTADO NACIONAL s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO” (Expte. 4065/16), en trámite ante la Cámara de Apelaciones de este Fuero; “CALATAYUD, MARIO PEDRO C/ ESTADO NACIONAL S/PROCESO DE CONOCIMIENTO” (Expte. 29050/2014), también en trámite ante la Cámara de Apelaciones de este Fuero; “MARTINEZ MARTIN ALBERTO C/ ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DDHH S/ACCION MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD” (Expte. 12525/15), en trámite ante la Cámara Federal de Rosario –Sala B-; y “LOPEZ CUITIÑO ALFREDO J C/ EN - (EXPTE 27275-2 MENDOZA J 2) S/ACCION DECLARATIVA DE CERTEZA” (Expte. 48702/06), en trámite ante el Juzgado Federal N° 2 de Mendoza.

2.- Ahora bien; al pronunciarse en el ya referido caso “FAYT”; el Alto Tribunal sostuvo, en relación con el artículo 96 del texto de nuestra Constitución histórica, “... *que ‘Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta ...’.* Esta norma, consagrada en el texto constitucional de 1853, no fue incluida entre las cláusulas que la convención reformadora estaba habilitada para revisar, según los arts. 2° y 3° de la ley 24.309. En ningún caso se mencionó el recordado art. 96 y, antes bien, esa cláusula mantuvo intacta su redacción en el texto sancionado en 1994 (art. 110)” (Consid. 11 del fallo).

Asimismo, la Corte consideró que “... *en el ‘Núcleo de Coincidencias Básicas’ tampoco aparece explícita ni implícitamente la mención a la garantía de inamovilidad con el contenido con el cual había sido establecida para los jueces federales por el citado art. 96 de la Constitución’.* Y agregó que “*En ningún párrafo de los puntos I y J del ‘Núcleo de*

Coincidencias Básicas’, relativos a la designación y a la remoción de los magistrados federales ... aparece algún contenido que pudiera interpretarse racionalmente como relativo a la posibilidad de fijar un término a la garantía de inamovilidad de los jueces federales con motivo del cumplimiento de una edad determinada ...” (Consid. 12 del fallo).

Y afirmó que “... no puede razonablemente admitirse que, con motivo de la reforma de una cláusula relativa a las atribuciones del Poder Ejecutivo Nacional, a saber, la intervención del señor presidente de la Nación en la designación de los magistrados federales -art. 99, inciso 4, de la Constitución reformada- materia que estaba explícitamente habilitada, puesto que el art. 86, inc. 5, del texto anterior, había sido incluido en el art. 2, inciso a, de la ley 24.309-, la convención reformadora incorpore una cláusula nítidamente extraña a las atribuciones del Poder Ejecutivo de la Nación, puesto que todo lo concerniente a la inamovilidad de los jueces es inherente a la naturaleza del Poder Judicial de la Nación y configura uno de los principios estructurales del sistema político establecido por los constituyentes de 1853, al punto que es uno de los dos contenidos sobre los que se asienta la independencia de este departamento y que ha sido calificada por el Tribunal, antes que de un privilegio en favor de quienes ejercen la magistratura, como una garantía en favor de la totalidad de los habitantes (Fallos: 319:24)...” (Consid. 14 del fallo).

Y concluyó que no correspondía reconocer a la Convención “... habilitación suficiente en las facultades implícitas que se derivan de la expresa atribución de reformar -en los términos del apartado I ... incorporado a la ley 24.309- el régimen de designación, ni jamás puede entenderse como implicado en una mera adecuación o actualización de las facultades del Poder Ejecutivo ...” (Consid. 15 del fallo).

Tales fueron los fundamentos medulares en los que el Alto Tribunal sustentó la declaración de nulidad de los textos incorporados por la Convención de 1994 como tercer párrafo del art. 99, inc. 4°, y como disposición transitoria undécima, de la Constitución Nacional.

Corresponde destacar que otro antecedente relevante es el referido al ex integrante del máximo Tribunal de Justicia, doctor Enrique S. PETRACCHI, quien promovió en su momento una acción declarativa de certeza con la misma finalidad; es decir, la declaración de nulidad de aquellas disposiciones de la Carta Magna.

El caso, caratulado “PETRACCHI, Enrique Santiago c/EN – Ley 24309 (Art. 110 CN) s/proceso de conocimiento”, tramitó ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia N° 12, Secretaría N° 23, de este Fuero, cuyo titular se expidió el 21 de marzo de 2012; en su fallo hizo lugar a la demanda, y declaró la nulidad de la reforma introducida por la Convención Reformadora de 1994 respecto de las mismas normas anteriormente descalificadas por la Corte en el precedente “FAYT”.

Para así resolver, el Juzgado consideró admisible la vía procesal intentada en aquel caso, destinada a hacer cesar el estado de incertidumbre sobre la situación jurídica del accionante. Y, en cuanto al fondo de la cuestión, se remitió a lo dispuesto por el máximo

Tribunal en la sentencia dictada en el caso “FAYT”; en especial, a los fundamentos vertidos en los Considerandos basales de ese fallo (transcriptos más arriba).

En su momento, en ejercicio de la representación procesal del Estado Nacional los letrados de este Ministerio de Justicia y Derechos Humanos fueron autorizados por el entonces titular de la Cartera –doctor Julio ALAK- a desistir del recurso de apelación interpuesto contra el fallo antes aludido.

Cabe acotar, finalmente, que en otras causas de similar objeto, promovidas por magistrados de instancias inferiores, la autoridad ministerial autorizó también a los representantes estatales a presentar allanamiento a la demanda, o bien a consentir sentencias cautelares o de fondo. Tal lo acontecido en estas causas: “FERREIROS ESTELA MILAGROS C/ EN-PEN-LEY 24309 S/PROCESO DE CONOCIMIENTO (Expte. 35966/2013)”, en la que el Estado Nacional se allanó a la demanda tramitada ante el Juzgado N° 3 de este Fuero; “MAFFEI LILIA MABEL C/ EN S/PROCESO DE CONOCIMIENTO (Expte. 35991/15)”, en la que se consintió la cautelar obtenida por la accionante en el marco del proceso en trámite ante el Juzgado N°2 de este Fuero; “MADERNA ETCHEGARAY HORACIO ALEJANDRO C/ EN S/PROCESO DE CONOCIMIENTO (Expte. 1465/15)”, en la que también se consintió la cautelar obtenida por el accionante, en el Juzgado N° 2 de este Fuero; y “RODRIGUEZ BRUNENGO NESTOR MIGUEL C/ EN-LEY 24309 S/PROCESO DE CONOCIMIENTO (Expte. 18601/05)”, también tramitado en primera instancia ante el Juzgado N° 2 del Fuero, caso este en el que el Estado desistió del recurso extraordinario interpuesto contra el fallo de segunda instancia favorable al demandante.

- VII -

CUESTIÓN FEDERAL

Para el improbable supuesto de que V.S. hiciera lugar a la acción de amparo que motiva el presente informe y atento la naturaleza de la cuestión tratada, esta parte articula el Caso Federal para ocurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por vía del artículo 14 de la Ley 48. Las normas federales aludidas en el curso de la presente respuesta, justifican el planteo tempestivamente realizado.

- VIII -

AUTORIZA

Asimismo, dejamos expresamente autorizados a los letrados mencionados en la Disposición Ss. C. N° 225/15 que acompañamos y a los Sres. Eduardo Honores, Carlos Meza, Mariana Barbará y Pedro O. Bogado, indistintamente, para examinar las actuaciones, diligenciar oficios y retirar copias, retirar el expediente y efectuar desgloses de las piezas procesales que

sean menester para la tramitación de la causa. Además, para dejar nota en el libro de asistencia, de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 133 y 134 del ordenamiento adjetivo.

- IX -

PETITORIO

Por lo expuesto, a V.S. solicito:

- 1) Tenga por presentado, en legal tiempo y forma, el informe requerido.
- 2) Tenga presente el caso federal articulado.
- 3) Oportunamente, rechace la acción instaurada.

Proveer de conformidad, que

SERÁ JUSTICIA